

XXXV JORNADAS ACADÉMICAS DE LA COMISIÓN DE ABOGACÍA JOVEN
DEL COLPROBA AÑO 2024

- **COMISIÓN:** DERECHO PENAL
- **TEMA:** LEY PROVINCIAL 12.569. UNA NECESIDAD DE CAMBIO
- **PONENTES:** GUERRERO ALAN (DNI 40.881.804) / LEIRIA MATIAS EZEQUIEL (DNI 36.081.646)
- **INSCRIPCIÓN PROFESIONAL:** COLEGIO DE ABOGADOS DE BAHIA BLANCA T° 21 F° 5 / COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO T° 52 F° 288
- **DOMICILIOS:** ALSINA 184, OFICINA 9, PLANTA BAJA, BAHÍA BLANCA / JOSÉ HERNÁNDEZ 4251, MUNRO, VICENTE LÓPEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- **TELÉFONOS:** 2983 – 57-0495 / 11-6545-6737
- **CORREOS ELECTRÓNICOS:**
 - alan.guerrero.estudio@gmail.com
 - mat-eze@live.com.ar



1. Abstract – 2. Introducción - 3. Ley provincial 12.569. Una necesidad de cambio - 4. Conclusión - 5. Propuesta

1.- Abstract

La violencia contra la mujer y las situaciones de violencia intrafamiliar son un flagelo cada vez más presente en nuestra sociedad, flagelo que no solo se da en el ámbito privado sino también a consecuencia del mal uso de la normativa existente y que ha sido sancionada para erradicar dicho tormento. En la actualidad en vez de disminuir la cantidad de casos existentes, existe un aumento exponencial que pone en jaque a nuestra sociedad. Por ello, es necesario contar con herramientas acordes para abordar el problema de raíz y no que sean utilizadas mecánicamente sin atender a los derechos de las personas involucradas. Es necesario una modernización de la normativa existente tendiente a garantizar no solo los derechos de las personas denunciantes sino también de quienes son denunciados, sancionando incluso a los agentes estatales que incumplan con sus deberes de funcionario público.

2.- Introducción

Es innegable que cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando de uno de los mayores flagelos que se repite una y otra vez en nuestra sociedad. Por ello, es menester tener claro de que es que estamos hablando. A la hora de hablar de violencia contra la mujer debe necesariamente hacerse referencia a la definición que la ley 26.485 nos brinda en su artículo 4. En dicho artículo, la misma es definida como “(...) toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. (...)”¹

Pero esta definición no es la única que debemos tener en cuenta. Aunque la violencia puede darse entre extraños, es común que se dé en el ámbito laboral y sobre todas las cosas dentro de un

¹ Ley 26.485, Artículo 4, disponible en servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/texact.htm

grupo familiar, entendido este como matrimonio, uniones convivenciales e incluso uniones de hecho. Por ello, debe tenerse en cuenta que la ley 12.569 de la Provincia de Buenos Aires, define a la violencia interfamiliar como “toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito.”²

Ahora bien, no basta con saber de qué se trata, sino que es algo que debe combatirse o mejor aún erradicarse de una vez y para siempre. Para ello, es necesario utilizar en debida forma las herramientas con las que contamos. Sin embargo, ello es algo que lamentablemente no está sucediendo y que debe cambiar. El mal uso de la normativa no solo no contribuye a solucionar el flagelo de la violencia contra la mujer, sino que aumenta exponencialmente las situaciones de violencia a la que son sometidas. Por ello, es importante no perder de vista que la propia definición que brinda la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, dentro de lo que se entiende por violencia contra la mujer e intrafamiliar, no solo hace referencia a la que se ejerce en el ámbito privado sino que, incluye la perpetrada desde el Estado o por sus agentes (comprendidos entre estos últimos los jueces y juezas).

3.- Ley provincial 12.569. Una necesidad de cambio

Lamentablemente, la Provincia de Buenos Aires, no está exenta de ese mal uso que se hace de la normativa que tiene como fin salvaguardar a la mujer ante situaciones de violencia de género e intrafamiliar. Esto se debe a que en la práctica la ley provincial 12.569, no es utilizada en debida forma.

Uno de los problemas que más se advierten en la práctica y que, dada la importancia de su letra, es vital a la hora de abordar los casos de violencia contra la mujer e intrafamiliares es el incumplimiento del artículo 11 de la ley 12.569. En dicho artículo se establece la obligación de realizar audiencias separadas dentro de las 48 horas de haber ordenado las medidas enunciadas en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo o, en su defecto, desde el momento en que se tomó conocimiento de la denuncia.

Aquél artículo además, prevé la nulidad de las decisiones adoptadas si no se llevan a cabo aquellas audiencias y por ello, resulta ser uno de los más importantes de la ley. Esto significa que

² Ley provincial 12.569, disponible en Ley 12569 (gba.gob.ar)

muchas de las medidas cautelares que se toman como consecuencia de esta ley, podrían llegar a considerarse nulas. Esto no hace otra cosa que poner en tela de juicio la legitimidad de las intervenciones judiciales en estos casos. Sin embargo, en la práctica, estas irregularidades no se corrigen, sino todo lo contrario. Aún sin la celebración de las audiencias, las medidas dictadas se mantienen lo que da lugar a decisiones apresuradas que pueden perjudicar gravemente no solo a quienes denuncian sino también a quienes son denunciados.

Otro aspecto preocupante es que las medidas señaladas por el artículo 7 de la ley bajo análisis se toman inaudita parte, sin mayor prueba que permita vencer el principio constitucional de inocencia. Este principio fundamental consagrado en nuestra Constitución Nacional exige que toda persona sea considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, y su violación puede llevar a un daño considerable a la vida de los ciudadanos que son denunciados. Por lo tanto, es crucial que se realice un seguimiento e investigación exhaustiva de cada caso a los efectos de mantener, morigerar o agravar las medidas cautelares y para ello las audiencias contempladas en el artículo 11 de la ley resultan vitales.

A esto debe sumarse que el artículo 7 de la ley 12.569 nos ofrece un abanico de medidas que pueden tomarse ante una denuncia por violencia familiar y que no son taxativas sino enunciativas. Por lo que, dependiendo de la situación que se denuncie, pueden implementarse otras medidas que no figuran dentro de la nómina de la ley. Sin embargo, los magistrados suelen tomar siempre las mismas. Ante una situación de violencia, lo primero que se decreta es la exclusión del hogar, prohibición de acercamiento de la persona denunciada y cese de actos de perturbación. Entendemos que esto se da por una razón fundamental: la falta de investigación y seguimiento del hecho denunciado.

Parece que, ante una denuncia realizada por una mujer hacia un hombre, sin importar que sea realizada sin la menor prueba, la respuesta inmediata de los Juzgados de la Provincia de Buenos Aires es establecer una prohibición de acercamiento por 30 días y un cese de actos de perturbación. Un análisis práctico de estas decisiones arroja un error evidente. Para ciertos casos esas medidas pueden resultar sumamente excesivas y para otros marcadamente insuficientes.

Ahora bien, esto no sucede cuando la situación es al revés. Aunque no sea común, también pueden darse situaciones en las que quien resulta ser víctima es una persona del sexo masculino o que se identifica con dicho género, empero las denuncias no suelen ser tenidas en cuenta o incluso llegan a ser desestimadas. Puede darse el hecho de que no se dicten medidas de igual tenor a las tomadas cuando quien denuncia es una mujer o persona que se identifique con el género femenino.

Llegados a este punto, debemos aclarar que con esto no estamos diciendo que las denuncias sean falsas o que la violencia contra la mujer no exista ni mucho menos. Es claro que debe creérsele a toda persona que concurra a exponer una situación de violencia intrafamiliar dado que la realidad de una persona no es la misma que puede vivir otra. Ahora bien, entendemos que ese pensamiento debe ser enmarcado en el universo normativo que nos rige, por lo que el camino a seguir por parte de los Juzgados debería ser:

- 1.- Creer los dichos de la persona denunciante.
- 2.- Investigar los hechos denunciados.
- 3.- Determinar la veracidad de los hechos.
- 4.- Tomar las medidas necesarias para hacer cesar dichos hechos de violencia.

Aunque la ley 12.569 ha dado un paso importante en la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar con ello no alcanza. Es esencial modificarla para incluir procedimientos que aseguren una evaluación objetiva de las denuncias, para brindarle la importancia que cada caso merece, garantizando el respeto por el principio de inocencia y evitando una aplicación indiscriminada y abusiva de la normativa. Con ello, se evitarían las irregularidades existentes a la fecha y que incluso pueden llegar a mancillar una ley que tiene un noble fin.

4.- Conclusión

La Ley 12.569 de la Provincia de Buenos Aires representa un avance significativo en la protección de las víctimas de violencia familiar y de género. Sin embargo, su aplicación enfrenta serios desafíos que requieren atención urgente. Es fundamental implementar medidas de seguimiento que aseguren la efectividad de las medidas cautelares, la defensa de los derechos de los denunciados y la real protección de las víctimas tanto desde los órganos del Estado como desde ámbito privado para lo cual la capacitación en cuestiones de género resulta clave. Entendemos que la ley debe ser modificada no solo en su letra con la implementación de audiencias obligatorias, sino también en su esencia posibilitando que aquellos magistrados que no cumplan con sus deberes sean sancionados.

5.- Propuesta:

Por ello, proponemos:

1.- Se modifique el artículo 11 primer párrafo de la ley 12.569, incluyéndose al final del mismo lo siguiente: “En caso de que las audiencias no se realicen en dicho plazo el magistrado interviniente será pasible de sanción.”

2.- Se cree el artículo 11 bis disponiendo lo siguiente: “Si quien no compareciera a la audiencia del artículo 11 fuera quien denuncia, las medidas tomadas en función del artículo 7 solo tendrán vigencia por el plazo de 30 días. Mientras que, si quien no compareciera fuera la parte denunciada, las medidas tendrán vigencia durante toda la tramitación del proceso, pudiendo incluso ampliarse indefinidamente.”